



Con Alberto Demichel, octogenario, conservador a ultranza y antiguo ministro del Interior con gran fuerza represiva, el Régimen uruguayo se sucede a sí mismo.

De la dictadura a la dictadura

Hacia el "nuevo Uruguay"

La aventura del Uruguay en los últimos años es, como la de tantas otras Repúblicas latinoamericanas, trágica. Uruguay tuvo una democracia falaz y una guerrilla urbana armada increíblemente eficaz: la de los Tupamaros. Tuvo una ocasión para restaurar la democracia, buscando una línea chilena —en la época de Allende—, creando el "frente amplio" como coalición electoral: durante la campaña, los Tupamaros abrieron —no muy convencidos— una especie de tregua. Pero las elecciones se perdieron, y no muy limpiamente, según el jefe de la izquierda unida, el general Liber Seregni; y además la tregua sirvió para desorientar y desorganizar a los Tupamaros, que, como toda organización revolucionarista, necesita una disciplina y una acción continuas para poder mantenerse. Bordaberry, Presidente elegido por cooptación —nombrado directamente por el anterior, Pacheco Areco— dio una amplitud de poderes a las fuerzas militares para que combatieran a los Tupamaros, infiltrados ya en las mismas zonas del poder —en contacto, al menos, con la connivencia de algunos poderosos, ministros incluidos, que querían asegurarse el futuro personal en un régimen que les parecía inevitable—, y el combate fue triunfal, no sin la presencia de buenos asesores de los Estados Unidos, con ar-

mas y bagajes. Los Tupamaros fueron exterminados o tuvieron que huir del país (hay quien dice que la organización está todavía latente y puede resucitar).

Como siempre, esas situaciones de tensión no se detienen en sí mismas. La limpieza contra los Tupamaros se extendió a la limpieza contra los comunistas —que, por cierto, habían tenido una prudente reserva contra el revolucionarismo y la guerrilla, como sus partidos hermanos en el continente: su vieja experiencia les decía que por la vía de la fuerza, en las condiciones objetivas conocidas, la contrarrevolución reaccionaría y ganaría—, y de los comunistas se pasó a toda oposición liberal, democrática o de izquierda. La represión se formalizó en un golpe de Estado militar, que, sin embargo, mantuvo a Bordaberry al frente del país como Presidente. No se ha aclarado nunca si Bordaberry fue en principio un Presidente prisionero, o por lo menos anulado, o al revés, si fue el motor de una contrarrevolución cruel. En los últimos años se le ha achacado toda la culpa de un sistema de torturas, encarcelamientos, asesinatos, exilios y prisiones que ha llamado la atención en un continente tan proclive a esa forma de política. Desde el golpe de Pinochet en Chile, Bordaberry se dio como modelo ese sistema, y su ánimo de sobrepasarlo le ha llevado a los mayores excesos. Si la Iglesia ha protestado alguna vez, Bordaberry la ha acusado de haberse dejado infiltrar por el comunismo. Uruguay se ha convertido, desde el punto de vista de los derechos humanos más elementales —incluso el derecho del ser humano a la existencia— en un escándalo continuo. Sean cuales sean los verdaderos culpables, el nombre del dictador Bordaberry está al frente de esta odiosa operación.

Acaba de ser depuesto. El 1 de junio, los militares que le habían sostenido en el poder y que le estaban tolerando han decidido que no era el Presidente apto para estos tiempos, y pura y simplemente le han quitado su cargo para dárselo a un octogenario, Alberto Demichel, catedrático de Derecho en sus buenos tiempos, conservador a ultranza y antiguo ministro del In-

terior con gran fuerza represiva. Es una especie de golpe de Estado, aunque cueste trabajo llamarle así: las fuerzas que gobiernan son las mismas. Pero si Bordaberry estaba dando la imagen de un país sangriento, acentuada últimamente con los asesinatos de exiliados uruguayos en Buenos Aires —atribuidos a una "santa alianza" de fuerzas policíacas o paralelas en el subcontinente, pero sobre todo a la persecución incesante y obsesiva de Bordaberry contra sus enemigos—, se advierte que lo que se busca es un cambio de imagen.

Sin demasiadas esperanzas. No se trata de restaurar una democracia, sino de institucionalizar la dictadura y darle un carácter más abierto. Se ha hablado ya de un "modelo brasileño", lo cual está, naturalmente, lejos de una forma democrática. En este modelo se habla de un plan de diez años para institucionalizar el país, para una reapertura del Parlamento y para un nuevo juego político de los dos partidos oligárquicos que tradicionalmente han compartido el poder, los "colorados" y los "blancos" (los blancos, en principio, fueron los azules, un partido y un ejército patrocinado por España, frente a la influencia francesa de los "colorados": se enviaban desde aquí los uniformes azules, pero el calor y las lluvias los desteñían hasta convertirlos en "blancos"). Mala nota para Tarrasa). De momento, el poder personal va a ser sustituido —o mediatizado— por un Consejo de Estado de veinticinco miembros —designados directamente—, que asesorará al Presidente: más adelante se elegirá un Presidente que sustituya al anciano Demichel, pero esta elección la hará una reunión del Consejo de Estado con los generales en ejercicio en el país. Con esta institucionalización se pretende llegar hasta 1986; es decir, dentro de diez años. Sería entonces cuando se celebren elecciones generales para un Parlamento, a las que concurrirían los candidatos de los dos partidos tradicionales: "blancos" y "colorados".

¿Qué pasará durante estos diez años de tregua? Los planes de los militares son los de reestructurar el país y su economía —la economía es su vieja enfermedad, como la de

todo el subcontinente: y lo será siempre mientras se mantenga la estructura dictada desde Washington— y buscar la "madurez" para la "democracia". Cuando se piensa que en otros tiempos Uruguay fue llamada la Suiza de América por su florecimiento económico, su sentido igualitario y democrático, su política sin golpes demasiado visibles y su sentido de las libertades, se puede reflexionar mucho sobre todo lo que se ha ido perdiendo y sobre la necesidad de la "madurez" que ya estaba conseguida. Pero es indudable que en estos diez años pueden ocurrir también acontecimientos que desborden los planes establecidos.

Entre otros propósitos, aunque no declarados, está el saneamiento moral del régimen. Naturalmente, no puede declararse que el nuevo régimen va a acabar con las torturas, las desapariciones y las detenciones arbitrarias, porque eso sería tanto como reconocer que han existido. Pero sí se trata de dar una nueva imagen. El "pinochetismo" tiene mala prensa en el mundo, y ni siquiera Washington lo puede apoyar verbalmente: el mismo Kissinger ha estado relativamente severo en sus intervenciones en Santiago de Chile, aunque el Departamento del Tesoro haya seguido ayudando al Gobierno de Pinochet, el de Defensa enviando armas y la CIA ayudando a la represión. Se trata de una imagen que hay que borrar.

Cierto que por ahora —y quién sabe si, de verdad, dentro de diez años se podrá recuperar la pequeña ficción de los dos partidos oligárquicos, entre los cuales se reparten tradicionalmente los grandes apellidos, las grandes familias poderosas de la nación— no habrá partidos, Parlamento, prensa libre, sindicatos... Pero si se consiguen suprimir las torturas, las persecuciones, los asesinatos y los secuestros, habrá sido una victoria inicial de la solidaridad mundial con el Uruguay.

Lo que es nada seguro es que se haya conseguido. A pesar de la voluntad demostrada por los militares en este nuevo movimiento, hay todavía una estructura durísima en el país. Que todavía no se ha borrado.

■ JUAN ALDEBARAN.